

Cruz Varas y otros c. Suecia, n° 15576/89

Resumen de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 20 de marzo de 1991¹

HECHOS.- Los demandantes en este asunto, el señor Hector Cruz Varas, su esposa, la señora Magaly Martiza Bustamento Lazo y su hijo Richard Cruz, nacido en 1985, son ciudadanos chilenos. El señor Cruz Varas llegó a Suecia el 28 de enero de 1987, donde solicitó asilo político. Su esposa y su hijo viajaron a Suecia, para encontrarse con él el 5 de junio de ese año.

El 22 de junio de 1987, la policía sueca interrogó al demandante en relación con las razones que originaban su solicitud de asilo. Al respecto, el señor Cruz Varas manifestó haber tenido participación en agrupaciones políticas de ideología socialistas desde 1968, lo cual se intensificó con la instauración en Chile del Gobierno de Pinochet, después del golpe militar en 1973. Su oposición al régimen le había acarreado algunas detenciones, malos tratos e ingresos en un campo militar. A pesar de estos incidentes, tanto la policía como el ejército chileno le habían dejado tranquilo. Sin embargo, su precaria situación financiera le obligó a salir del país.

El 21 de abril de 1988, la Oficina Nacional de Inmigración sueca rechazó otorgarles el estatuto de refugiados a los tres demandantes y decidió expulsarlos y prohibirles regresar a Suecia, sin autorización de las autoridades competentes, antes del 1 de mayo de 1990. . En opinión de la Oficina, no existían razones políticas lo suficientemente graves para considerarlos refugiados en virtud del artículo 3 de la Ley sueca sobre extranjería o de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Después de que el recurso contra la decisión de la Oficina fuese desestimado, los demandantes alegaron nuevas razones para oponerse a la ejecución de la orden de expulsión. Invocaron así argumentos suplementarios en favor de la solicitud de asilo.

El señor Cruz Varas declaró que su regreso a Chile podría acarrearle una detención, tortura o incluso la muerte, dado que mientras había permanecido en Suecia había estado en contacto con un grupo político denominado “Frente Patriótico Manuel Rodríguez”, organización que había intentado asesinar al General Pinochet.

La policía sueca decidió ejecutar la orden de expulsión y el recurso contra esta decisión fue también desestimado. Sin embargo, la orden de expulsión no pudo ser ejecutada porque los demandantes no se presentaron a tiempo para tomar el avión en el que debían volver a Chile. Interrogado de nuevo por la policía, el señor Cruz Varas afirmó haber sufrido torturas y malos tratos durante sus detenciones en Chile. El miedo a que la policía sueca estuviese colaborando con la chilena le había impedido contarle antes.

El demandante presentó diferentes testimonios e informes médicos con el objeto de probar la persecución política a la que había sido sometido en Chile. La Oficina trasladó el expediente al Gobierno sueco el 8 de marzo de 1989. En su opinión, la orden de expulsión debía ser

¹Este resumen fue elaborado para el ACNUR por los Profesores Luis Peral y Carmen Pérez de la Universidad Carlos III de Madrid. El resumen es para fines informativos únicamente. Para el texto oficial de la sentencia, consulte la página del TEDH, en la dirección www.echr.coe.int/Eng/Judgments.htm.

ejecutada, dado que las distintas declaraciones del demandante parecían contradictorias y poco fiables.

El demandante presentó al Gobierno nuevos informes médicos con los que pretendía probar que había sido objeto de torturas, así como informes psiquiátricos en relación con las secuelas que los hechos descritos les habían provocado a él y a su hijo. La representación en los países nórdicos del ACNUR afirmó en diversas ocasiones que en su opinión el demandante no debía regresar a Chile.

PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISION.- El 5 de octubre de 1989, fue registrada la demanda contra Suecia por la Secretaría del Tribunal. De acuerdo con su Reglamento, la antigua Comisión Europea de Derechos Humanos aconsejó al Gobierno sueco no expulsar a los demandantes hasta haber tenido ocasión de examinar la demanda. Sin embargo, el 6 de octubre de 1989, el señor Cruz Varas fue devuelto a Chile. Su mujer y su hijo entraron en la clandestinidad en Suecia. El 9 de noviembre, la Comisión aconsejó al Gobierno sueco no expulsar a la mujer y al hijo del señor Cruz Varas, y tomar las medidas oportunas para que el primero pudiera regresar a Suecia.

Ante la Comisión, los demandantes alegaron que la expulsión del señor Cruz Varas violaba el artículo 3 del Convenio Europeo, puesto que la misma exponía al demandante al riesgo de ser torturado por las autoridades chilenas. Asimismo, alegaron que la expulsión del hijo del señor Cruz Varas violaba el artículo 3 y que la separación de la familia constituía una violación del artículo 8. Invocaban, finalmente, los artículos 56 y 13 del Convenio.

El 7 de diciembre de 1989, la Comisión declaró admisible la demanda en lo que se refería a la violación de los artículos 3 y 8, e inadmisibile en cuanto al resto de las alegaciones. En su informe de 7 de junio de 1990, declaró que no existía violación de los artículos 3 ni 8 del Convenio. Sin embargo, declaró que el Gobierno sueco había quebrantado las obligaciones que le incumbían en virtud del antiguo artículo 25.1 del Convenio, al no evitar la expulsión del señor Cruz Varas tal y como la propia Comisión le había pedido sobre la base del artículo 36 de su Reglamento interno.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.- El Tribunal Europeo comienza recordando su sentencia dictada en el caso Soering, en el cual estableció que la decisión de un Estado parte de extraditar a un fugitivo podía afectar al artículo 3 del Convenio y comprometer, por tanto, la responsabilidad del Estado siempre que se hubiere demostrado la existencia de motivos considerables (“substantial grounds”) para creer que el interesado, en caso de ser extraditado al país requirente, corriese el riesgo real (“real risk”) de ser objeto de tortura o penas o tratos inhumanos o degradantes.

Aunque el presente caso no se trata de extradición, sino de la expulsión del demandante, el Tribunal estima que el razonamiento también resulta aplicable en relación con decisiones de expulsión y, *a fortiori*, en casos en los que se ha practicado la expulsión. En consecuencia, para establecer la citada responsabilidad, se hace necesario apreciar la situación en el país de destino en relación con las exigencias del artículo 3. Ello no supone, sin embargo, comprometer la responsabilidad del Estado tercero. Al contrario, en el marco del Convenio Europeo, el Tribunal sólo puede declarar la responsabilidad del Estado parte cuando un acto suyo tiene como resultado directo exponer a un particular a los malos tratos prohibidos por el Convenio.

Para saber si, en el caso concreto, estamos en presencia de un riesgo serio (“real risk”) de que el señor Cruz Varas haya sido objeto de un trato incompatible con el artículo 3 del Convenio, el Tribunal se basa en el conjunto de pruebas que se le presentan o que el mismo se procura de oficio. Del examen de todo ello, el Tribunal aprecia que si bien es cierta la desconfianza que los solicitantes de asilo experimentan cuando tienen que prestar testimonio en contra de las autoridades y las dificultades que encuentran para consolidar su versión ante ellas, un hecho concreto arroja una duda considerable en relación con la credibilidad del señor Cruz Varas: su silencio durante más de dieciocho meses, desde su primer interrogatorio, sobre las actividades clandestinas que había llevado a cabo en su país y sobre las torturas que le habían infligido las autoridades chilenas. Su credibilidad queda asimismo en entredicho, en opinión del Tribunal, debido a las distintas versiones de lo ocurrido que relató a la policía a lo largo de los diferentes interrogatorios.

El Tribunal tiene en cuenta además, de una parte, que, durante su estancia en Chile después de la expulsión, el demandante no pudo encontrar nuevas pruebas para demostrar sus actividades clandestinas y, de otra, que la evolución democrática en Chile había mejorado la situación política, e incluso había propiciado la repatriación voluntaria de los refugiados.

El Tribunal pone también de relieve el alto grado de conocimiento y la significativa experiencia del Estado sueco en este tipo de demandas, dado el alto número de solicitantes de asilo que habían llegado a Suecia desde 1973. Declara, en este sentido, que no hay violación del artículo 3 del Convenio. Por otra parte, según el Tribunal, no ha quedado en este caso suficientemente probado que la expulsión pueda causar ni al demandante ni a su hijo un trauma de una entidad tal que pueda considerarse como un trato inhumano o degradante, en violación del artículo 3.

En relación con el artículo 8, el Tribunal afirma que es necesario tener presente que la Comisión había pedido al Gobierno sueco que no ejecutase la orden de expulsión. El desconocimiento de esta petición por parte de Suecia había colocado a la familia del señor Cruz Varas ante una dura alternativa: permanecer en Suecia y recurrir al sistema del Convenio Europeo viajar a Chile con el interesado. El Tribunal afirma en este sentido, que, en realidad, el Gobierno sueco había ordenado la expulsión de los tres demandantes y que **sólo la desaparición de la mujer y el hijo del señor Cruz Varas había impedido la aplicación de la medida de expulsión. Considera, por tanto, que la separación de la familia no es imputable a Suecia y que no ha habido violación del artículo 8.**

En cuanto a la violación del antiguo artículo 25.1, el Tribunal comienza recordando que **el Convenio debe ser interpretado en función de su carácter específico de tratado de protección de derechos humanos y que, en consecuencia, sus exigencias deben ser establecidas de forma concreta y efectiva.** Aunque este análisis favorece la afirmación de un poder de la Comisión y del Tribunal de ordenar medidas provisionales con el fin de

preservar los derechos de las partes pese a que el Convenio no contenga ninguna disposición explícita al respecto, la ausencia de una tal disposición resulta ser determinante.

El Tribunal afirma que una indicación de la Comisión realizada sobre la base del artículo 36 de su Reglamento de procedimiento no es susceptible de crear una obligación jurídica, y que se forzaría el sentido del antiguo artículo 25.1 del Convenio en caso de extraer de su tenor una tal obligación. Tampoco dicha obligación puede extraerse de los principios generales del Derecho Internacional, dado que la cuestión de la fuerza obligatoria de las medidas provisionales indicadas por las jurisdicciones internacionales es objeto de controversia y no existe una regla jurídica uniforme. Son los Estados parte los que deben apreciar la oportunidad de resolver esta situación adoptando una disposición explícita en la materia.

Sin embargo, la Corte expresó que debe tomarse en consideración que:

“la adopción de medidas bajo el artículo 36² (...) se da bajo circunstancias muy excepcionales. Ellas resultan útiles para casos de expulsión (o extradición) y dan aviso al Estado contratante que, en opinión de la Comisión, se le podría ocasionar un daño irreparable al peticionario en caso de que se ejecute su expulsión y, además, que existen buenas razones para pensar que su expulsión podría dar lugar a una violación del artículo 3 del Convenio” (párr. 103).

En cualquier caso, el Tribunal considera que la expulsión del señor Cruz Varas no le impidió ejercer eficazmente su derecho a un recurso ante la Comisión Europea de Derechos Humanos y que, por lo tanto, no hay violación del antiguo artículo 25.1 del Convenio.

² Luego de la reforma del mecanismo de supervisión de la CEDR en noviembre de 1998, el artículo 39 reemplazó la disposición del artículo 36 del Reglamento de la anterior Comisión.